



## PROVINCIA DE BUENOS AIRES

## PODER JUDICIAL

En Pergamino, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Homónimo, integrada por los Dres. Martín Miguel MORALES y Gladys Mabel HAMUÉ, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver el recurso interpuesto en la **Causa N° 7931 (del Registro de esta Alzada)**, caratulada **"Córdoba, Gabriel Alejandro s/ Incidente de Prisión Preventiva (IPP N° 961-24/00)"**, de trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 2 departamental; habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: **Dres. Gladys Mabel HAMUÉ - Martín Miguel MORALES**, estudiadas las actuaciones se decidió plantear y votar las siguientes:

**CUESTIONES:**

- I.- ¿Es admisible el recurso deducido?
- II.- ¿Se ajusta a derecho la resolución impugnada?
- III.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la **PRIMERA CUESTIÓN**, la Sra. Jueza, **Dra. Gladys M. HAMUÉ**, dijo:

El recurso de apelación interpuesto por el Señor Defensor Oficial Penal Subrogante de la UFD N° 2, Dr. Alejandro Mazzei, ha sido presentado en tiempo y forma y contra uno de los supuestos al cual la normativa ritual habilita la vía recursiva.

En función de ello, considero que debe declararse admisible (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y ccs. del CPP).

A la misma cuestión, el Sr. Juez, **Dr. Martín M. MORALES**, por análogos fundamentos, vota en igual sentido.

A la **SEGUNDA CUESTIÓN**, la Sra. Jueza, **Dra. Gladys M. HAMUÉ**, dijo:

Arriba la presente incidencia a esta Alzada en virtud del remedio impugnativo informado anteriormente, que se dedujo contra la

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

resolución que convirtió en prisión preventiva la detención de Gabriel Alejandro Córdoba, en el legajo investigativo ya puntualizado al inicio.

En primer término, el recurrente plantea la nulidad del decisorio aludido por considerar extemporáneo el requerimiento fiscal, puntualizando los antecedentes del caso; al respecto señala que su pupilo fue aprehendido el 8 de febrero, disponiéndose su detención el 10 del mismo mes; luego, el 23 de febrero se decretó la prórroga establecida en el art. 158 del ritual. Sin más, el 11 de marzo el quejoso solicita la inmediata libertad de su defendido, interponiendo ese mismo día el fiscal la solicitud de prisión preventiva, que fuera dictada el 14 de marzo, todas las fechas del año en curso.

Hace referencia además, que en su oportunidad interpuso una acción de Hábeas Corpus en virtud de la ilegalidad de la detención de su asistido, la que no tuvo acogida favorable por parte del Juzgado Correccional N° 1 departamental, quien consideró que el planteo debía efectuarse en la instancia de apelación de la prisión preventiva.

Dando sustento a su planteo nulificante, señala que el art. 158 del CPP establece que el pedido de prisión preventiva debe efectuarse, como máximo, dentro de los 30 días de efectivizada la detención, lo que no ocurrió en el caso, desacreditando el argumento de que el vencimiento del plazo aludido recayó en un día inhábil, por tratarse de un plazo perentorio (art. 140 del ritual), con cita de doctrina en aval de su postura.

Agrega que, efectuando una interpretación armónica de la normativa y jurisprudencia aplicable, la libertad del imputado en el proceso debe ser la regla y toda norma que la restrinja debe ser interpretado con carácter restrictivo (art. 3 del CPP).

Considera contradictorio con dichos postulados que el fiscal actuante pueda tener el día de gracia que establece el art. 139 del CPP, ejemplificando al respecto.

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

Critica que se haya requerido la prórroga de la cautelar preventiva para darle un uso discrecional, cuando no se dispuso ni una sola diligencia durante ese período, resultando inadmisibile.

Afirma que el acto jurisdiccional cuestionado resulta nulo de nulidad absoluta por encontrarse vulnerado en modo flagrante el debido proceso (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8 CADH; 14 PIDCP).

Hace referencia a lo normado en los arts. 201 y ss. del CPP y la doctrina que considera aplicable, impetrando la nulidad de la resolución y la inmediata libertad de sui asistido.

Subsidiariamente, se opone también a los fundamentos esgrimidos por el juez de grado en punto a no están dadas las condiciones para que Córdoba recupere su libertad a partir de los peligros procesales advertidos, en virtud de que el mismo fue excarcelado días antes de la formación de la causa que diera origen a la incidencia impugnada, en el marco de otro proceso.

Contrarrestando, puntualiza que el imputado tiene arraigo en esta ciudad y no cuenta con medios para fugarse; carece de antecedentes penales y que para el caso de una hipotética condena, podría ser dejada en suspenso (principio de proporcionalidad); de su declaración prestada en los términos del art. 308 del ritual, ha dado detalles de las razones que lo llevaron a cometer este hecho, colaborando con la fiscalía actuantes para dar con la persona que fomenta la ejecución del ilícito que se le endilga.

Trae a colación un fallo dictado por la Sala I de la Casación Provincial en Causa 45818 caratulada "Loreto Juanito Carlos s/ Habeas Corpus", en aval de su postura y pone de resalto la grave situación que atraviesa el servicio penitenciario bonaerense, reflejada en la Resolución 2301/18 de la Suprema Corte de Justicia dictada en el marco del Documento sobre las Condiciones de Detención en la Provincia de Buenos Aires, que clama por el uso racional de la prisión preventiva y la aplicación

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

de medidas alternativas o morigeradoras, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes.

Concluye impetrando que se revoque la medida cautelar impuesta, en la medida de sus agravios.

Adelanto que, contrariamente con la petición defensista, analizadas las actuaciones digitalizadas y los agravios sintéticamente desarrollados, voy a proponer al Acuerdo la confirmación del auto impugnado.

Sellada la admisibilidad de la vía recursiva interpuesta al tratar la primera cuestión, corresponde aquí iniciar el tratamiento del planteo de fondo, adelantando desde ya, que no encuentro arbitrariedad en la decisión del Sr. Juez de grado (arts. 106 y 210 del CPP).

En punto a la nulidad inicial que formula el quejoso, y entendiendo suficientemente abastecido el extremo con el detalle que efectúa en sus agravios sobre las fechas de aprehensión, detención, prórroga, solicitud fiscal de la cautelar preventiva y su dictado por parte de la judicatura, es de mi opinión que precisamente la normativa que cita en su desarrollo no aparece excepcionada del supuesto en tratamiento.

El art. 139 del CPP (Texto según Ley 14647) establece que *“Todos los plazos son continuos y en ellos se computará los días feriados. Si el plazo venciere en uno de éstos se considerará prorrogado de derecho al día hábil siguiente. Durante los períodos de la feria judicial los plazos se suspenderán para realizar la oposición en los términos del artículo 336, la impugnación del auto de elevación a juicio y de la sentencia definitiva, exceptuándose dichos plazos dentro del procedimiento para los casos de flagrancia ... Si el término fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ellas podrá ser realizado durante las cuatro (4)*

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

*primeras horas del día hábil siguiente ...”; el art. 158 del mismo cuerpo normativo prescribe que “El auto que decreta la prisión preventiva será dictado dentro del quinto día de la solicitud del Agente Fiscal presentada dentro del plazo de quince (15) días prorrogables por igual plazo, a contar del día en que se hubiere efectivizado la detención...”.*

La postura adoptada por la defensa, en su afán de revertir la situación de su pupilo, aparece cuanto menos huérfana de toda apoyatura normativa, doctrinaria y jurisprudencial, al agotarse no solo en su propio parecer sino que, además, el articulado antes enlistado y sus concordantes del ordenamiento adjetivo no prescriben una excepción expresa para el supuesto en tratamiento.

Al solo efecto de graficar la situación descripta, el vencimiento del plazo para la solicitud fiscal de prisión preventiva se habría producido –tal como lo puntualiza el quejoso– el domingo 10 de marzo pasado, habiendo efectuado la presentación el lunes 11 siguiente a las 10:54 horas, esto es dentro de los límites procesales permitidos; por fuera de tener en consideración los principios y garantías alegados sobre la interpretación restrictiva que debe primar cuando se encuentre en juego la libertad de una persona, ello no puede derivar en la caprichosa postura de hacer aparecer una situación excepcionada cuando el ordenamiento no la prevé, y por ende inatendible.

Concluyendo el punto, la nulidad impetrada debe ser desoída (arts. 201, 139, 158, ss. y ccs. del CPP).

Ahora bien, no habiendo sido cuestionada la materialidad ilícita ni la participación de Córdoba en el hecho en cuestión, solo resta entrar en consideración de los agravios introducidos sobre la justificación de la cautelar impuesta; al respecto es dable recordar que el Tribunal que integro se ha expedido reiteradamente postulando que, en nuestro sistema jurídico, el marco constitucional conlleva la admisión excepcional del

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

encarcelamiento preventivo del imputado, en cuanto compromete el derecho a la libertad ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la CN; art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.2 del PIDCP) y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (art. 18 y 75 inc. 22 CN; art. 9.1 PIDCP).

Esa naturaleza supra-legal del bien afectado hace surgir en cabeza del eventual sujeto pasivo de una medida de coerción, una garantía activa, cuya restricción sólo opera cuando se cumplen los principios de necesidad y proporcionalidad.

En síntesis, la regla de libertad que deriva del principio de inocencia, debe ceder por resultar necesario preservar los fines que persigue el procedimiento mismo averiguar la verdad y actuar la ley sustantiva.

Esta conclusión emana de la aplicación al caso del informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto fija parámetros que autorizan la restricción de la libertad: 1º) presunción de culpabilidad; 2º) seriedad del delito y eventual severidad de la pena; entre otros.

Al respecto tiene dicho la CSJN en la causa "BRAMAJO, Hernán Javier s/ Incidente de excarcelación", sentencia del 12/9/96, considerando 8, que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales, constituyendo dichos informes pautas interpretativas de la CIDH la cual goza de jerarquía constitucional (art. 75. 22 CN).

Contrariamente a lo señalado por el recurrente, no advierto arbitrariedad alguna en el análisis efectuado por el juzgador puesto que, tomando como premisa lo establecido en los arts. 144, 146, 148 y 159 del CPP, los peligros procesales que dan sustento a la prisión preventiva se presumen, por un lado, del indicio de peligrosidad que deviene de las

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

## PODER JUDICIAL

características del hecho motivo de investigación (robo agravado por escalamiento en los términos del Art. 167, inc. 4to. en relación al 163, inc. 4to. del Código Penal), y de las condiciones personales del imputado, a quien –por fuera de las notas positivas que alega el recurrente- le fue concedida la excarcelación ordinaria el día anterior al que fuera aprehendido en la comisión del hecho prima facie aquí endilgado, en el marco de la IPP N° 7882-24/00, de trámite por ante el mismo Juzgado de Garantías interviniente; definiendo ambas circunstancias la proporcionalidad y necesidad de la medida adoptada.

A mayor abundamiento, la situación descripta queda enmarcada en uno de los supuestos establecidos en el art. 148 primer párrafo del CPP, a tener en cuenta por el juzgador para merituar sobre la existencia de peligros procesales.

Desarticulados los argumentos defensistas, es dable señalar que este Tribunal ha dicho reiteradamente que, a partir del cuadro expuesto precedentemente, adquiere relevancia el tipo de presunción legal y que la misma opera *iuris tantum*, por lo que la existencia de indicadores particulares positivos del imputado pueden lograr desvirtuarla.

Ahora bien, más allá de la disconformidad expresada por el Sr. Defensor en su libelo impugnativo, y por fuera del alegado arraigo y las razones autoasumidas que lo habrían llevado a cometer el hecho, no se advierten elementos objetivos que permitan neutralizar el peligro de fuga advertido.

En síntesis, la regla de libertad que deriva del principio de inocencia, debe ceder, por resultar necesario preservar los fines que persigue el procedimiento. Siguiendo estas premisas, reitero, aparece adecuado y proporcional a las constancias analizadas precedentemente, confirmar la resolución atacada.

**Así lo voto.**



## PROVINCIA DE BUENOS AIRES

## PODER JUDICIAL

A la misma cuestión, el Sr. Juez, **Dr. Martín M. MORALES**, por análogos fundamentos, vota en igual sentido.

A la **TERCERA CUESTIÓN**, la Sra. Jueza, **Dra. Gladys M. HAMUÉ**, dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse las cuestiones precedentes, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1. Declarar admisible el remedio impugnativo intentado.
2. No hacer lugar al planteo de nulidad impetrado (arts. 201, 139, 158, ss. y ccs. del CPP).
3. Desestimar el recurso en tratamiento y por ende **confirmar** la resolución puesta en crisis en cuanto convierte en prisión preventiva la detención de Gabriel Alejandro Córdoba, en la IPP N° 961-24/00.

Es mi voto.

A la misma cuestión, el Sr. Juez, **Dr. Martín M. MORALES**, por análogos fundamentos, vota en igual sentido.

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

1. Declarar admisible el remedio impugnativo intentado (arts. 164, 421, 439, 441, 442 y concs. del CPP).
2. No hacer lugar al planteo de nulidad impetrado (arts. 201, 139, 158, ss. y ccs. del CPP), desestimar el recurso interpuesto por el Señor Defensor Oficial Penal Subrogante de la UFD N° 2, Dr. Alejandro Mazzei y, en consecuencia, **confirmar** la resolución que convierte en prisión preventiva la detención de Gabriel Alejandro Córdoba, en la IPP N° 961-24/00 de trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 2 departamental (arts. 144, 148, 157 y concs. del CPP).





230102091001189500



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

PODER JUDICIAL

Notifíquese electronicamente a: [fisgen.pe@mpba.gov.ar](mailto:fisgen.pe@mpba.gov.ar) -  
[ufdp2.pe@mpba.gov.ar](mailto:ufdp2.pe@mpba.gov.ar)

Regístrese - Oportunamente devuélvase.-

**REFERENCIAS:**

Funcionario Firmante: 18/04/2024 10:39:48 - HAMUE Gladys Mabel - JUEZ

Funcionario Firmante: 18/04/2024 10:43:55 - MORALES Martin Miguel -  
JUEZ

Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:54:21 - ANNAN Horacio Daniel -  
SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico:

Domicilio Electrónico:



230102091001189500

**CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL PERGAMINO**

**NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS**

Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/04/2024 11:54:33 hs.  
bajo el número RR-105-2024 por ANNAN HORACIO.